

## **PARAGUAY: A UN AÑO DEL GOLPE DE ESTADO EN LA REPÚBLICA TRASNACIONAL DE LA SOJA**

El 22 de junio de 2012, una noticia, entre tantas otras, surcó el cielo mediático nacional: habían dado un golpe de Estado en Paraguay. Por tratarse de un país vecino con un modelo económico muy similar al nuestro, es curioso que a la noticia no se le haya dado la trascendencia debida. Ese día, los millonarios no sólo festejaban en Argentina con el ascenso de River Plate, sino que también lo hacían en Paraguay con el derrocamiento de Fernando Lugo. Pronto, una catarata de nuevas noticias ocupó las primeras planas de la opinión publicada y todo continuó como si nada hubiera pasado.

Paraguay es una nación muy particular, de cuya historia podemos aprender muchas cosas. Desde su independencia en 1811 y a diferencia de sus vecinos, sus primeros presidentes, José Gaspar Rodríguez de Francia y Carlos Antonio López, lograron un absoluto autoabastecimiento alimentario con la totalidad de las tierras del país en propiedad estatal y usufructo campesino, así como con un importante desarrollo de sus propios ferrocarriles, astilleros y flota mercante. Nunca permitieron entonces que nadie les financiara ningún proyecto, sino que ellos mismos lo fueron haciendo a medida que les daban los presupuestos, sin perder el control de sus economías.

Esta independencia y desarrollo industrial autónomo, por supuesto, resultaba intolerable para los británicos que, con la complicidad de las elites locales de los países vecinos, ya habían sometido a las economías de Argentina, Brasil y Uruguay a sus propias necesidades comerciales, convirtiéndolas en exportadoras de materias primas y en importadoras de manufacturas en un intercambio absolutamente desigual. Por eso fue que entre todos ellos decidieron acabar con el mal ejemplo y emprendieron entre 1864 y 1870 la vergonzosa guerra conocida como de la Triple Alianza, una masacre en toda regla de la que el Paraguay aún no se pudo recuperar. El 80% de la población masculina fue asesinada e inmediatamente después se privatizaron las tierras y se detuvo el desarrollo industrial, quedando el país en manos de una casta conformada por empresarios y militares que se unieron en el seno del Partido Colorado, creado por Brasil. Como “contraparte”, las oligarquías mercantiles argentinas crearon a su vez el Partido Radical Liberal Auténtico, en un esquema que se mantiene hasta el día de hoy.

Cinco años después de terminada la Guerra, ya se habían malvendido masivamente las tierras fiscales y los ferrocarriles; y Paraguay, como todo país decente de la época, ya se encontraba endeudado hasta el cuello con Gran Bretaña. Hacia 1890 se había vendido más de la mitad de la tierra a privados, la mayor parte de ellos extranjeros o funcionarios del gobierno, llegando a tener algunos de ellos más de cinco millones de hectáreas con pueblos y aldeas indígenas adentro, a los que sometían a condiciones serviles de vida.

Para darse una idea, hoy el 2% de los propietarios concentra entre el 70% y el 85% de la tierra; y en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú y Caaguazú, más del 60% de la tierra está en manos extranjeras. El resto se lo reparten los diferentes miembros de las oligarquías ganaderas y sojeras, que no pagan al Estado un céntimo en impuestos. Como decía el anarquista español Rafael Barrett, que escribió sus mejores páginas justamente entre los yerbateros paraguayos: “Es lo que se designa con la frase de abrir mercados nuevos. Suele ser preciso abrirlos a cañonazos”.

Para fines del siglo XIX, en territorio guaraní ya había 300 mil campesinos sin tierras, o sea que tenían que trabajar cosechando para los dueños de las industrias yerbateras o hachando para las empresas forestales o en los quebrachales a cambio de vivienda y comida de la peor calidad. En los 50, ya bajo la dictadura de Stroessner, quebraron las empresas del tanino y en los 60 bajaron los precios de la yerba. A partir de los 70, mientras continuaba la expulsión de campesinos, las empresas extranjeras comenzaron a especializarse en el cultivo de soja, desforestando y contaminando todo el oriente del país a su paso, hasta formar parte del monocultivo imparable en que se está transformando hoy todo el Cono Sur.

La soja ocupa ya más de 3 millones de hectáreas, y la mayor parte se hace en el sudeste, rodeando a los campesinos que se quedaron y que se ven obligados a beber aguas contaminadas por los agrotóxicos. Y en el Chaco paraguayo, en el occidente del país, donde la soja por ahora es poco rentable, es la ganadería de los grandes rodeos la que desplaza a los pobladores originarios hacia los suburbios de Asunción, en cuyos alrededores malvive en chabolas la tercera parte del país. Una cantidad mayor aún de población tuvo que migrar a Argentina y a otros países como mano de obra baratísima.

En el caso de Lugo, su breve presidencia fue una primavera sin demasiadas flores, pero primavera al fin. El ex obispo nunca tuvo aliados en el Congreso ni apoyo en los medios de comunicación como para intentar una reforma agraria y una transformación hacia una economía con valor agregado, no contaminante y diversificada, además de mejor distribuida socialmente que la del modelo agroexportador puro y duro al que los miembros del Mercosur estamos cada vez más sometidos y acostumbrados.

Sin embargo, Lugo cometió tres pecados que los dueños de las tierras mal habidas junto a las transnacionales exportadoras de granos y las importadoras de insumos no le perdonaron: ponerle trabas a la aprobación de nuevos transgénicos de Monsanto, destinar parte de los recursos del país a programas sociales para las clases bajas y presentar en el Congreso un proyecto de ley de deforestación cero. Sus grandes errores, no obstante, fueron ceder ante estos grupos —que se cercioraron así de su debilidad política—, y desmovilizar a los campesinos, que eran los únicos que lo podían apoyar.

Dos semanas después de consolidado el golpe de Estado, el presidente de facto, Federico Franco, liberalizó mediante decreto las nuevas semillas transgénicas de algodón y maíz, cuya aprobación había estado congelada durante la última parte del gobierno de Lugo hasta conocer sus efectos sobre la salud y el medio ambiente. Al mismo tiempo, Franco liberó de impuestos a todos los exportadores de granos, a quienes Lugo había propuesto gravar. El *holding* conformado por el Grupo Zucolillo, Monsanto, Cargill y el diario ABC Color fue quien movió los hilos detrás de la asonada.

### **Comparaciones odiosas**

Este golpe de Estado en Paraguay y el permanente deterioro de su vida institucional son el más claro ejemplo del sitio al que se dirige también Argentina cada vez que le regala nuevos mercados de tierras a los *pooles* de siembra sojeros y maiceros, negocios incomparables a los exportadores de granos, y leyes de patentes a los fabricantes de agrotóxicos y semillas transgénicas. Por esta vía, llegará un momento no muy lejano en el que estas compañías tendrán tantas tierras, puertos, trenes y poder concentrado que, si no les agrada el accionar del gobierno nacional de turno, cada vez más debilitado e impotente ante ellos, se sentirán dueños de poner a otro más acorde a su conveniencia.

A partir de la misma semana posterior al golpe y repitiendo el esquema inaugurado en Honduras tres años antes —donde los asesinatos de pequeños agricultores y periodistas hoy son el pan de cada día—, el gobierno paraguayo puso a la policía a desalojar impunemente a miles de campesinos, sobre todo en el oriente del país, zona que en la práctica dejó de pertenecer a Paraguay hace décadas para convertirse en un territorio de la República Trasnacional de la Soja.

La participación puntual de las corporaciones del agro en el golpe es algo que debería ser investigado exhaustivamente. No sea que pase lo que en Argentina, donde apenas si se castigaron a algunos pocos militares de la dictadura, que no eran más que marionetas de las trasnacionales con discursos nacionalistas; pero donde los verdaderos gestores e impulsores del golpe, que amasaron fortunas y desarticularon las bases sociales y sindicales de nuestro país, fueron los terratenientes y las corporaciones del agro que, respaldados por el terror, destruyeron la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y restauraron el modelo colonial agroexportador.

Cuanto más se consolida en Paraguay un modelo de acumulación similar, siendo hoy el cuarto despachador de soja y el sexto de carne del mundo, más campesinos e indígenas son expulsados del campo, más contaminados están los suelos y las aguas, más bosques originarios se desmontan, más se encarecen los alimentos, más dependiente se vuelve su economía de los precios internacionales de los *commodities* y más aumentan la pobreza y la desnutrición entre sus habitantes. Cualquier coincidencia con la realidad nacional argentina es pura semejanza en los modelos de acumulación.

Muchos hablan de que a partir del 2002 quedó atrás el neoliberalismo criollo, pero si por ello nos referimos al control del Estado por parte de las corporaciones y a la preeminencia de la valorización financiera, hoy el agro argentino está más neoliberalizado que nunca, atravesando este modelo flexible su tercera etapa histórica. La primera etapa fue la del golpe militar, donde el más importante objetivo de la dictadura fue destruir todo resabio de solidaridad social y del recuerdo de la intervención del Estado en la economía, que hasta entonces había sido el garante de la vida campesina y de los alimentos baratos. Esto se lograba a través del control de los precios mínimos para los productos y de la protección de las agroindustrias nacionales.

Las grandes multinacionales del agro, así como las entidades locales que agrupan a los productores más concentrados, fueron cómplices e instigadores de todos los golpes de Estado de la historia argentina. Y la finalidad de todos ellos fue siempre garantizar la continuidad del modelo agroexportador. Hay a disposición en las hemerotecas cientos de documentos en los que sus representantes apoyan las intervenciones militares. Y en la última dictadura, la más feroz de todas, representantes de estas entidades ocuparon también cargos de importancia en los Ministerios de Economía y Agricultura.

La etapa del menemismo, en la que el dólar estaba barato, la producción agropecuaria era imposible, se privatizaba el país y a los chacareros les remataban sus campos, fue una segunda fase en el modelo de acumulación neoliberal. Ahora, con los campos ya a disposición de los grandes productores, con el dólar caro, sin juntas reguladoras y con la exportación masiva de granos transgénicos alentada por el gobierno y por la oposición, estamos en una tercera etapa neoliberal. Primera, segunda y tercera etapa, entonces, no se entienden una sin la otra. Y detrás de los políticos descartables y encarcelables de cada una de ellas, siempre encontraremos a los mismos e impunes actores sociales.

Antes de que sea demasiado tarde, las agriculturas latinoamericanas deberían iniciar una potente transición hacia modelos agroecológicos orientados a los mercados internos, que incluyan la prohibición de los desmontes, de los latifundios y de las fumigaciones. Para lograrlo, los habitantes de las ciudades tendrán que reclamar también la opción de poder salir de su hacinamiento y de su desinformación acerca de los problemas reales del país. Y tantos nuestros empleados del gobierno como sus opositores, aunque más no sea por amor propio, deberían salir también del cinismo que implica trabajar como agentes de las corporaciones transnacionales mientras brindan discursos antiimperialistas. Al norte del Pilcomayo, en las tierras rojas del Paraguay, se encuentra un perfecto ejemplo de hacia dónde nos puede conducir la continuidad de la opción actual.